

PLAN COLOMBIA: DEBATE EN LIMA SOBRE SU IMPACTO

El Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) convocaron al conversatorio "El Plan Colombia y la gobernabilidad en la subregión andina", que buscaba aportar a la reflexión y acción sobre un tema que ha sido poco debatido y mal informado en el Perú. Las actividades relacionadas con este conversatorio se llevaron a cabo en Lima los días 14 y 15 de diciembre del 2000 y constaron de tres partes.

La primera se realizó en la mañana del 14 de diciembre entre un grupo multidisciplinario de expositores de Bolivia, Colombia y Perú, con expertos y/o representantes de ONG. La segunda tuvo lugar la noche de ese mismo día con motivo de la presentación del libro de Mariano Valde-rama Mito y realidad de la ayuda, América Latina al 2001, con un panel sobre el tema dirigido a representantes de la cooperación internacional en el Perú. La tercera se realizó en la mañana y parte de la tarde del 15 de diciembre, entre algunos expositores invitados y representantes de los agricultores de varias zonas cocaleras reunidos en Lima para una Asamblea Extraordinaria de la Coordinadora Nacional de Productores Agropecuarios (CONAPA-Perú).

En esencia, estas actividades tenían como objetivos: a) animar una discusión sobre el Plan Colombia en varias de sus facetas (seguridad, social, política, ecológica y económica); b) compartir información, reflexiones y propuestas alternativas sobre los impactos de este Plan en los países andinos, particularmente en el Perú, y c) analizar la gobernabilidad de la subregión andina en el contexto geopolítico de la aplicación del Plan Colombia.

Pero, en última instancia, se buscaba constituir un grupo de personas e instituciones que dieran seguimiento a la información sobre los impactos

y la búsqueda de alternativas pacíficas, justas y eficaces a lo que a todas luces parece ser la tendencia en la aplicación del Plan Colombia: su militarización, su "narcotización" y su andinización. Ya se han formado grupos de este tipo en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Se trataría de la primera experiencia en el Perú que, felizmente, está en proceso de gestación con este primer esfuerzo.

Para estos conversatorios se invitó a los siguientes expositores: Antonio Aranibar por Bolivia; Alejandro Angulo, Carlos Gustavo Cano y Juan Manuel Ospina por Colombia; y Alberto Adrianzén, Alberto Arciniegas, Hugo Cabieses, Enrique Obando y Ricardo Soberón por Perú.

Los expositores entregaron ponencias escritas que han sido publicadas, junto con trabajos de otros autores (Luis Fernando Barón, Francisco De Roux y Alfredo Molano), bajo el título Perú, Plan Colombia y drogas: ¿Seguridad nacional o amenaza regional?

El presente informe resume lo principal de las intervenciones de los expositores durante los dos días de debates e informa sobre las actividades a llevar a cabo en el futuro por el Grupo de Monitoreo que se ha formado. Contiene los siguientes puntos: a) los marcos de análisis para contextualizar el Plan Colombia de Hugo Cabieses; b) la transformación del Plan Colombia en una versión estadounidense con las intervenciones de Juan Manuel Ospina, Alejandro Angulo y Carlos Gustavo Cano; c) los efectos del Plan en Bolivia de Antonio Aranibar; y, d) los efectos en el Perú de Alberto Arciniegas, Alberto Adrianzén, Enrique Obando y Ricardo Soberón.

En la medida en que la base de gran parte de los temas que se discuten en torno a los impactos del Plan Colombia tiene que ver con los procesos de colonización de la zona andino-amazónica, con el control y apropiación de recursos naturales y biogénéticos, con los efectos que las políticas comerciales internacionales de subsidios alimentarios tienen sobre el mundo rural de los países andinos, con las erradas políticas agrícolas internas que se suman a las medidas macroeconómicas neoliberales que hunden al campo y, en general, con la falta de desarrollo rural integral sostenible, es que hemos acogido en nuestras páginas esta discusión.

Contextualizando el debate

Hugo Cabieses

El análisis y los efectos del Plan Colombia sobre los países andinos pueden ubicarse en conocidos y típicos marcos de análisis: geográfico, seguridad, económico, ecológico y sociopolítico. No obstante este debate no ha involucrado mayormente a importantes actores de la sociedad civil, como los agricultores de materias primas para la producción de drogas con fines ilícitos y las poblaciones de sus entornos geográficos.

Hasta ahora son los que no tienen voz en los debates de políticas ni en el diseño de las estrategias, y en las acciones desarrolladas que implica la

ejecución del Plan –tanto en Colombia como en los países andinos– son quienes están poniendo los muertos. Por ello es que finalmente, luego de describir los marcos de análisis, hacemos un llamado a la reflexión sobre la necesidad de convertir a las víctimas y blancos de la violencia que el Plan Colombia desata en sujetos de sus propias propuestas y en parte fundamental de la solución.

MARCO GEOGRÁFICO

La zona del conflicto que el Plan considera tiene un área aproximada de 3,5 millones de kilómetros cuadrados e involucra a los países fronterizos de Colombia, principalmente en la región andino-amazónica, pero no sólo a ellos. De sur a norte se trata de Bolivia, Perú, parte de Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Nos referimos a una región con una población aproximada de 100 millones de habitantes en un teatro de operaciones directas de guerra que abarca una porción importante de la Amazonia, la Orinoquia, la selva del Chocó y el golfo del Darién.

Es decir, nos referimos al pulmón del mundo, a la mayor reserva de agua dulce del planeta, a una incalculable riqueza biológica y a la reserva y crisol de culturas autóctonas con conocimientos secretos que la humanidad ni imagina poseer. Proteger esta zona para el futuro de la especie humana, no destruirla mediante guerras impuestas y usar racionalmente sus incalculables riquezas es una tarea que la sociedad civil debe encarar a través de las organizaciones de los habitantes de estas selvas y de quienes vinieron a colonizarlas a lo largo de cientos de años y en las décadas recientes.

MARCO DE SEGURIDAD

El Plan busca aumentar la presencia militar de los Estados Unidos en la región andino-amazónica con el objetivo de controlar las protestas sociales y la convulsión política que trae la aplicación de las políticas neoliberales. No se trata de un Plan Colombia sino que involucra a los países andinos, dado que parte del financiamiento estadounidense va para Bolivia, Ecuador, Perú y otros países, pero además porque su puesta en marcha puede trascender las fronteras colombianas.

El 73% del financiamiento de los Estados Unidos se destina a asuntos militares y de seguridad, lo que implica el entrenamiento de 12 500 tropas –de la Policía, el Ejército, la Aviación y la Marina–, 500 asesores estadounidenses, 80 helicópteros Huey y Black Hawk, US\$ 60 millones para radares y todo un sofisticado equipo tecnológico militar diseñado para hacer la guerra. Sus consecuencias geopolíticas y de seguridad son múltiples, preocupantes y de sentidos encontrados, por lo que resulta necesario que las sociedades civiles de los países involucrados –o de los que pueden verse en este trance– tomen cartas en el asunto, discutan las implicaciones para la seguridad hemisférica y actúen en consecuencia, con acciones que

detengan sus aspectos negativos y potencien lo positivo que el Plan contiene, como la posibilidad de realizar acciones comunes.

MARCO ECONÓMICO

Se trata del esfuerzo económico externo más significativo de los Estados Unidos en toda su historia de lucha contra las drogas: alrededor de US\$ 1300 millones, de los que se han autorizado US\$ 1158. Lo preocupante en este esfuerzo es el contenido militar de US\$ 747,5 millones, pero el Plan también contiene fondos por un total de US\$ 271,5 millones para impulsar el “desarrollo alternativo”, promover el respeto por los derechos humanos y fortalecer a la justicia colombiana. Se han aprobado US\$ 101 millones para desarrollo alternativo y acciones sociales en Colombia, US\$ 42 millones para el Perú (10 para desarrollo alternativo y 32 para helicópteros policiales), US\$ 110 millones para Bolivia, US\$ 20 millones para Ecuador y cifras menores para otros países.

Si la aplicación del Plan produce una escalada militar en la región —como parece ser la tendencia—, las economías de los países andinos se verán seriamente afectadas: disminución del ritmo de crecimiento económico, incremento del déficit fiscal, nuevas presiones inflacionarias, afectación del ingreso y el empleo de la población en general, compresión de la demanda, recesión productiva, déficit en la balanza comercial y de pagos, fuga de capitales, aumento del endeudamiento externo, etcétera.

En Colombia hay recursos relativamente reducidos para el “desarrollo alternativo” que llevan, además, el sello del fracaso y poco nivel de ejecución de los proyectos y programas impulsados hasta ahora. La reducción de cultivos por esta vía es una virtualidad debido a que no se ataca el problema de fondo, que son las políticas macroeconómicas internas y las políticas agrícolas de subsidios alimentarios de los países desarrollados que se incrementan en el marco de la OMC. Estas políticas son antirrurales, devastadoras del medio ambiente y contrarias a la producción campesina, razón por la cual los programas impulsados no han sido sostenibles en el tiempo y tampoco han tenido sostenibilidad ecológica.

MARCO ECOLÓGICO

La aplicación del Plan acentuará la absurda e ineficaz política de fumigación química no sólo en el Putumayo sino en otras zonas de producción de coca, amapola y marihuana, cuyas nocivas consecuencias ecológicas han sido debidamente documentadas por instituciones públicas y privadas tales como la Defensoría del Pueblo y Acción Andina. Ello se verá acentuado por la “guerra biológica” con el uso del hongo *Fusarium oxysporum*, cuyo efecto será devastador, según han reportado investigadores de diversos países, incluyendo los Estados Unidos.

La erradicación forzoza manual o por fumigación, según la experiencia de los países andinos, ha llevado a la dispersión e internamiento de los cultivos hacia zonas alejadas, con la consiguiente ampliación de la frontera agrícola vía roza y quema de bosques e instalación de cultivos en las cabeceras de las microcuencas con un efecto devastador en épocas de lluvia.

Por otro lado, tal como ha sido reportado por Stan Golf –militar retirado de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos que en 1992 brindó entrenamiento en Colombia para programas antidrogas¹–, el principal interés de su país en el Putumayo es el petróleo, y con la guerra que allí se desataría se trata de defender operaciones de la OXY, la British Petroleum –que se ha fusionado con la estadounidense AMOCO– y la Texas Petroleum para asegurar el control en los futuros campos colombianos. Es conocido el efecto ecológico que tiene la instalación de petroleras en las zonas de selva, más aún cuando durante un buen tiempo será una tierra de nadie.

MARCO SOCIOPOLÍTICO

Aparte de los muertos y heridos que la aplicación del Plan ya está produciendo en el Putumayo y en otras zonas del país, se estima que en el sur de Colombia provocará no menos de 30 000 desplazados hacia las fronteras con Ecuador y, eventualmente, al Perú. Asimismo, el “paro armado” lanzado por las fuerzas guerrilleras durante noviembre y diciembre ha paralizado totalmente las actividades del Putumayo, provocando problemas sociales y un sufrimiento inmenso a la población de ese departamento, además de los daños ecológicos que el reinicio de la fumigación está produciendo en sus selvas y bosques.

No obstante estos efectos negativos, se debe destacar que el Plan pone por delante y acepta el tema de la negociación política del conflicto interno colombiano, separa explícitamente a la guerrilla del narcotráfico y ha formado parte del debate interno estadounidense durante su proceso electoral. La presencia de Clinton en Cartagena a fines de agosto con un discurso más bien contemporizador, dialogante, en donde no propone la militarización del conflicto (“Colombia no es un nuevo Viet Nam”), ha sido clave en el proceso electoral interno, lo que en parte explica por qué Al Gore estuvo en las encuestas por encima de Bush y en las elecciones hubo un empate que sólo fue resuelto después de dos meses.

Los impactos sociales, económicos, políticos, culturales, humanitarios y ambientales que el Plan Colombia trae aparejado comienzan a sentirse con fuerza en las regiones suroriental (Putumayo), nororiental (selva del Catatumbo) y noroccidental (Chocó y Darién) de Colombia. La conflictivi-

1. Ver *El Espectador*, 8 de octubre del 2000.

dad social de la región se agravará no sólo por la fragilidad social y política que en general experimenta la región andina, sino por la dramática crisis humanitaria por la que atraviesa la población que está siendo desplazada (más de un millón de personas en Colombia desde 1995) y masacrada (más de 18 000 muertos sólo en el año 2000): la segunda mayor tragedia del mundo reciente después de Kosovo.

DE OBJETOS A SUJETOS

En este contexto, los actores del conflicto hasta ahora son: a) las fuerzas armadas de todos los bandos –gobierno, guerrilla y paramilitares– en plena guerra de posiciones; b) las fuerzas políticas nacionales e internacionales que tratan de azuzar el incendio por razones de seguridad nacional o detenerlo por deseos de seguridad humana; c) las ONG colombianas y de otros países, que impulsan la eliminación y/o “humanización” del conflicto; y d) los intelectuales y científicos que se pronuncian a favor o en contra de los aspectos parciales más dañinos del conflicto, como la “guerra biológica”.

Las víctimas del conflicto, los verdaderos actores que se encuentran todos los días entre varios fuegos a la vez, los hombres y mujeres organizados o no de las municipalidades, sendas y valles de las diversas zonas, hasta ahora no son sujetos de este drama humano y no tienen voz ni voto a la hora de tomar decisiones. Se trata de objetos, de víctimas.

Por ello, el objetivo de estos conversatorios en el Perú y de las acciones que realicemos en el futuro debe ser contribuir a proporcionar a los mencionados actores espacios de reflexión y acción, y ayudarlos a convertirse en sujetos que luchen por una salida negociada, eficaz, justa y pacífica a un conflicto que lleva demasiados años y víctimas.

Del plan criollo al plan USA: Retomar el plan inicial

Juan Manuel Ospina

PLAN REGIONAL CON LECTURA COLOMBIANA

Lo primero que debemos anotar es que no se trata de un Plan Colombia sino de un plan andino. En la medida que seamos capaces de mirar más allá de las fronteras nacionales nos acercaremos a comprender el problema en su complejidad y, por consiguiente, a poder plantear de una manera clara y realista alternativas de acción. Pero dicho esto, no podemos soslayar las condiciones específicas de cada país. Aunque la problemática sea común, hay ingredientes propios que generan resultados distintos.

En el caso colombiano, el gran elemento diferenciador es la existencia de un viejo conflicto interno cuyas características no pueden equipararse con otras realidades del mundo andino. Este es un conflicto muy antiguo.

Manuel Marulanda –“Tirofijo”– empezó a disparar hace 52 años y, en el ínterin, Colombia ha tenido doce presidentes. No obstante, hasta los noventa se trataba de un conflicto interno de baja intensidad, ubicado en los extramuros de la geografía nacional. Este conflicto era parte de la “normalidad” del país, y nunca se transformó en una guerra civil. El cambio básico en esta situación lo trae el narcotráfico.

Con el general Rojas Pinilla, luego de la violencia posterior al “bogotazo”, se inició el período del Frente Nacional, de gobiernos compartidos entre liberales y conservadores, con el que empezó la primera política de paz y reconciliación liderada por el liberal Alberto Lleras Camargo. Luego vino el período de negociación impulsado por Julio César Turbay, que fracasó. Pero éste fue continuado con mucho dinamismo por Belisario Betancourt. Actualmente estamos en la tercera fase de este período de negociación que abrió Betancourt. El problema con las negociaciones es que no se atacaron las causas sino los síntomas de la violencia colombiana, que es estructural.

FARC, PROPUESTA AGRARIA Y CONTROL TERRITORIAL

A diferencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se fueron estructurando básicamente alrededor del concepto de autodefensa campesina, en el que el control territorial era importante para garantizar la no presencia militar y generar organización en las comunidades campesinas. El discurso agrario de las FARC es la matriz de su propuesta, en la que nunca ha hablado de la estatización de la tierra, colectivización o granjas colectivas. Siempre ha propiciado la división del latifundio para generar una pequeña economía campesina, lo que es una visión muy clásica amarrada al territorio. El control territorial está en el corazón de la estrategia guerrillera y de la inspiración que durante años ha llevado adelante a las FARC.

EL NARCOTRÁFICO

Pero los cambios en esta estrategia comenzaron a producirse cuando apareció el narcotráfico, que en un primer momento fue combatido por las FARC. Al inicio de las conversaciones de paz con el M19 durante el gobierno de Belisario Betancourt, el narcotráfico jugó un papel muy importante, lo que provocó enfrentamientos por el control territorial en zonas en las que el narcotráfico tenía presencia, como el Caquetá y el Cauca. De estos enfrentamientos surgieron los paramilitares, financiados por los narcotraficantes para luchar contra la guerrilla: primero contra el M19 y luego contra las FARC y el ELN.

Hacia principios de los noventa comenzó el encuentro entre la guerrilla y el narcotráfico y empieza a desarrollarse la dinámica que tenemos ahora: activa visibilidad militar, agresividad y potencia de fuego que no posea y

controles territoriales alrededor de las zonas de narcotráfico y narcocultivos. Por ello, en el corto plazo la dinámica fue quién capturaba las rentas del narcotráfico y, en respuesta, se dio nacimiento al paramilitarismo en su versión actual.

EL PARAMILITARISMO

Las FARC sostienen que el paramilitarismo es un simple apéndice de las fuerzas militares, pero esto constituye una presentación simplificada de una realidad mucho más compleja. En la actual coyuntura el gobierno estadounidense ha tomado la decisión de fondo de entender que el conflicto no se va a resolver a corto plazo, que hay una negociación que va a demorar, que mientras esa negociación avanza hay que atender el frente militar y que ello no se puede hacer con paramilitares fortalecidos.

Está claro que las FARC no se han fortalecido con la negociación y que, por el contrario, las fuerzas militares regulares han recuperado un terreno que habían perdido. Pero los paramilitares han crecido y, en la astuta visión estadounidense, hay que enfrentarlos porque violan los derechos humanos.

MARCHAS COCALERAS: DIFERENTES LECTURAS

Un momento crítico en la relación creciente entre conflicto interno y narcocultivos se dio con las marchas cocaleras de 1996 en el sur del país, que lograron movilizar a más de 200 000 campesinos. La primera lección fue que con ellas las FARC lograron legitimarse ante las comunidades, lo que provocó una enorme crisis política. Pero la torpeza con la que el tema fue manejado por el Estado al quebrar su defensa de los intereses de los pequeños campesinos aisló a la población del Estado en la misma proporción en que legitimó a la guerrilla de las FARC.

Pero una segunda conclusión es que en Bogotá y Washington se entendió que había una dinámica perversa entre narcocultivos y guerrilla, aunque con lecturas un tanto distintas. Para Estados Unidos el problema central es acabar con el narcocultivo para terminar con el conflicto. Para Colombia el problema es acabar con la guerra y para ello hay que enfrentar los narcocultivos. Estamos hablando de lo mismo pero desde ángulos distintos. Ello tiene implicaciones muy graves: esa diferencia fue la que provocó el cambio en el Plan Colombia. A partir de ese momento se asume que hay relaciones muy complejas entre desarrollo del conflicto y desarrollo del narcotráfico. No se puede acabar con uno sin acabar con el otro.

PASTRANA Y EL PLAN COLOMBIA COLOMBIANO

El presidente Pastrana llegó al gobierno en un momento de grave aislamiento internacional y tuvo la inteligencia de ver la posibilidad de fortale-

cerse internamente con el manejo internacional del conflicto colombiano. Este conflicto interesa en el mundo por el narcotráfico, si no sería una guerra interna que se produce y cocina sangrando a fuego lento. Las consecuencias internacionales del conflicto colombiano están signadas por el hecho de que está ligado con el narcotráfico mundial.

En este contexto nos correspondió participar activamente con los temas rurales en el debate de la Ley del Plan de Desarrollo (Ley 508 de 1998), que fue la que dio el marco general para lo que sería el Plan Colombia en su versión primera y colombiana. La pelea que se dio era que este Plan debía estar estructurado fundamentalmente sobre un eje de desarrollo rural que, aunque pusiera énfasis en las zonas en conflicto involucradas con el narcotráfico y los narcocultivos, debía mirar al conjunto del sector rural. Ello porque la crisis estructural del mundo rural alimenta la violencia al no haber un rediseño radical de esta situación en el país. La ley se aprobó a principios de noviembre de 1998 y tuvo un plazo fijado por la Constitución nacional.

Un mes después, en Costa Rica hubo una reunión a la que asistió el secretario general de la Presidencia, Juan Hernández, por el gobierno de Estados Unidos los señores Romero y Chicola y por las FARC Raúl Reyes. El anfitrión fue Álvaro Neiva, senador colombiano que diseñó la estructura del Plan Colombia y permitió un acercamiento entre las FARC y Andrés Pastrana. Luego de esta reunión y de la instalación del gobierno de Pastrana, Neiva apareció comprometido en un problema de enriquecimiento ilícito denunciado por la Fiscalía.

ASESINATO DE INDIGENISTAS

En la reunión de Costa Rica quedó establecido que iba a haber un trabajo coordinado entre colombianos, gobierno estadounidense, comunidades y FARC para montar una estrategia de desarrollo alternativo. Esto fue en diciembre de 1998. Pero a comienzos de febrero de 1999, las FARC asesinaron en la frontera con Venezuela a tres indigenistas estadounidenses y la reacción de su país fue inmediata: las FARC fueron declaradas terroristas. Tres semanas después apareció en Bogotá el señor Tiger, quien hizo una declaración destemplada diciendo que el Plan Colombia era una serie de vaguedades, que no había nada concreto y que habría que rediseñarlo.

EL PLAN DE LOS ESTADOS UNIDOS

De esta forma se elaboró la versión *made in USA*, en la que triunfó el planteamiento de la guerra contra el narcotráfico, las fumigaciones y la erradicación forzosa de cultivos, sobre lo que estaba planteado en la ley colombiana, que era el plan de desarrollo social y rural. Es así como el gobierno estadounidense se encargó de la parte militar del Plan: 70% del

presupuesto. Así no era la distribución inicial del Plan Colombia colombiano.

A pesar de la crítica que hacemos a la prioridad militar establecida en el Plan Colombia, debe entenderse la situación colombiana, en la que el país necesita fortalecer sus fuerzas regulares por la simple razón de que su debilitamiento implicaría fortalecer al paramilitarismo. Sin embargo, pese a este contenido principalmente militar del Plan, no está cerrada la puerta—inclusive del lado estadounidense— para retomar la senda que se perdió el día que las FARC mataron a los tres indigenistas, momento en el que los halcones tomaron la delantera.

Las visiones del Plan Colombia

Alejandro Angulo

Un primer aspecto a resaltar es la desfiguración del Plan Colombia, que comenzó como un plan de desarrollo y, por imposición externa, se volvió uno de guerra. Otro es que en nuestra historia hemos aprendido a convivir con el conflicto interno, pero también con el narcotráfico. Así, muchos conciben que hay dos fases en la revolución colombiana: una abortiva, que es la historia de las FARC durante cincuenta años haciendo la revolución sin lograr dar el vuelco, y la segunda —la del narcotráfico— con todo el influjo institucional y el problema ético que éste trae consigo. En este contexto, hay varias visiones del Plan Colombia.

LA VISIÓN DE “PAZ COLOMBIA”

Se trata del movimiento de las ONG y la sociedad civil, con un punto de vista de “izquierda” que contempla, en primer lugar, que se trata de un plan de guerra con una retórica social y que en esencia no resuelve el problema del tráfico de drogas, porque no toca a los grandes narcotraficantes, pero que sí atenta contra los pequeños cultivadores. Lo segundo es que el Plan no soluciona los grandes problemas sociales ligados a la miseria urbana y rural.

El problema colombiano no es buscar un desarrollo alternativo a la coca sino un desarrollo alternativo al modelo de desarrollo. Las FARC insisten sobre ese punto, pero su debilidad estriba en que no tienen un modelo alternativo definido. Por ello se producen todas las ambigüedades de la negociación sobre una propuesta gaseosa, frente a una antipropuesta gubernamental articulada por intereses creados que no son un plan de desarrollo oficial sino un plan de desarrollo mundial hacia el que todos estamos marchando. En tercer lugar, el Plan Colombia implica una escalada militar en todo el ámbito andino y está polarizando a la sociedad colombiana entre proparamilitarismo y antiparamilitarismo, con miles de muertos de por medio. En cuarto lugar, el Plan implica una guerra biológi-

ca y contra el medio ambiente, debido al uso de químicos y hongos en las fumigaciones.

LA VISIÓN DE LAS FARC

La segunda visión del Plan es que se trata de una estrategia geopolítica y, por consiguiente, apunta a involucrar a los países andinos. Por lo tanto, el objetivo del Plan es militar y de seguridad para los Estados Unidos. Para el Comando Sur de los Estados Unidos la cuestión es la reducción de la zona de tránsito y de producción, y por ello se traza una meta de fondos para el 2002 de 10% en las zonas de tránsito y de 15% en las fuentes, a 20% en las de tránsito y 30% en las fuentes para el 2007, lo que implica una interdicción clara y neta.

En este reparto no sólo entran los helicópteros sino también los radares y las bases, lo que supone una red de seguridad diseñada de la siguiente forma: 84% a Colombia por ser zona de producción principal; 6% a Perú y Ecuador, y 10% a Bolivia. Para las zonas de tránsito, como el Caribe, se cuantifica 39%; para Centroamérica y México 16%, y para los centros de control, como Aruba y Curazao, Liberia en Costa Rica y Sotocano en Honduras, respectivamente, el resto. Aruba y Curazao monitorean la Guajira en Venezuela y Sotocano y Liberia estarían a cargo del control del Pacífico y de toda la región centroamericana. Esa visión es absolutamente bélica.

PLAN CONTRA LA GUERRA CIVIL

El Plan Colombia es un llamado a la colaboración internacional para salvar al país de la guerra civil. Es así como el Plan tendría todas las ambigüedades de la cooperación al desarrollo con polarizaciones que se originan en torno a los conflictos políticos armados. En este escenario juega la parte de la cooperación europea, que afortunadamente equilibra la balanza mediante una visión política y estratégica alternativa, lo que constituye una esperanza para el futuro trabajo de coordinación andina.

En estas ambigüedades, tanto de desarrollo como de conflicto político, las mayores y más peligrosas están siendo inducidas por la influencia estadounidense de tipo militar. En el debate de los congresistas estadounidenses sobre el Plan Colombia surgen inmediatamente los intereses por colocar helicópteros, las armas de los comerciantes que están detrás de esa política. La prueba de ello es que han logrado convencer al gobierno colombiano de cambiar el énfasis con un condicionamiento sumamente fuerte.

EL PARAMILITARISMO Y LA REGIÓN

El tema del paramilitarismo lo tiene que considerar el país y la comunidad internacional. Es preocupante que la actitud totalitaria esté ganando simpa-

tías por el cansancio de la revolución de largo plazo de la que hablamos al principio. Es un error haber cambiado los objetivos del Plan, arriesgando la búsqueda de paz que propone el gobierno colombiano. Por ello existe el temor de que el conflicto colombiano, atizado desde fuera y agudizado desde dentro, rebasa las fronteras nacionales. Se trata de un peligro inminente que debemos discutir y enfrentar.

El tema colombiano es utilizado por los gobiernos vecinos como un elemento distractivo de sus problemas políticos internos, como fue el caso del Perú. En este caso se ha sabido de situaciones muy complicadas en las que, por un lado, se amenazaba a la guerrilla, y por el otro, se le vendían armas. Se trataba de un doble juego, semejante al existente con Venezuela. La visión del gobierno venezolano es que el Plan Colombia desequilibra la balanza regional del poder militar, lo que podría provocar una carrera armamentista. Sin embargo, estamos enfrentando una realidad de militarización independientemente del Plan Colombia, que no nace con éste sino que más bien es expresión de una estrategia más amplia.

Colombia no es el problema

Carlos Gustavo Cano

LA "LEY DEL ORO"

El problema no es Colombia sino la "ley del oro", y aquí explicamos por qué. A mediados de 1998, iniciado el gobierno de Pastrana, Rodrigo Verdero —que fue el primer director del Plan Colombia— y quien esto escribe, con el auspicio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), comenzamos a elaborar y redactar un documento titulado "Agroproyectos para la paz" inspirado en la "doctrina Arciniegas" expuesta en este seminario: primero reconciliar al pueblo para poder pacificar, y luego desarrollar para reducir cultivos con fines ilícitos.

A partir de este documento hicimos un video cuya distribución actualmente está prohibida. El 19 de diciembre de 1998, según nuestro bosquejo, el presidente Pastrana hizo el lanzamiento del Plan Colombia en el pueblo de Puerto Wilches. Al año siguiente, dicho documento fue en el maletín del Presidente a Washington y de allí vino otro Plan Colombia, debido a que "el que pone el oro pone la ley".

Así murió el Plan Colombia colombiano y el problema ha sido no ponerle el nombre correcto a las cosas. En lugar de hablar de un Plan Colombia se hubiera dicho que por ahora se necesita un ejército fortalecido para poder dar la batalla por la paz, y nos hubiéramos ahorrado problemas muy grandes.

La segunda reflexión sobre la "ley del oro" es que el tema de la droga evidentemente es un problema de seguridad nacional, pero las concepciones de esta seguridad nacional son distintas. Para los Estados Unidos se

resumen en una frase de Lee Brown, primer zar antidrogas: “Es más fácil matar a las abejas en su panal que perseguir a los consumidores en nuestro territorio”. La concepción de nuestros países es que si no se disminuye la demanda de drogas es imposible combatir realmente al narcotráfico y, por ende, disminuir los cultivos ilícitos y conseguir la paz. Pero como son los Estados Unidos los que ponen recursos para esta “guerra”, es la “ley del oro” la que establece la estrategia a seguir.

LECCIONES PARA EL PLAN COLOMBIA²

Como alternativa deberíamos tener un Plan Andino liderado por Colombia, en lugar de un Plan Colombia repudiado por los vecinos. Durante la pasada década los resultados de la ayuda externa para el mundo en desarrollo no han sido buenos, ya que la brecha entre las naciones pobres y ricas es hoy mucho más profunda que antes en varios ámbitos: tecnológico, financiero, de inversión, desplome de los precios de los productos básicos, protección y subsidios a la agricultura, y como resultado de todo ello, la deuda agobia a nuestros pueblos y actualmente es más onerosa que antes, a pesar de las tantas y tan celebradas medidas de alivio de los últimos años.

No obstante este lamentable balance, las instituciones ejecutoras del recetario del Consenso de Washington –principalmente el FMI– continúan comportándose con una arrogancia sin precedentes. Según reflexiona Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, “parte del problema son los ingenuos banqueros de inversión de veinticinco años de edad que desconocen la política mundial”. Sachs también ha concluido que los cinco países andinos se hallan en el último lugar en el orbe en materia de competitividad y, por ello, propone canalizar la poca ayuda externa que queda a través de organizaciones especializadas regionales, para que sean sus propios miembros, tras un diálogo honesto y renovado Norte-Sur, los que señalen las modalidades de aplicación de la misma y vigilen mutuamente el cumplimiento de sus responsabilidades compartidas en pos de propósitos comunes.

Un mecanismo así fue la clave del éxito del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, y bien podría ser el camino más idóneo para manejar, de manera participativa y consensual, la cooperación internacional que está llegando para reemplazar los cultivos ilícitos. De ser así, tendríamos un Plan Andino liderado por Colombia, en lugar de un Plan Colombia repudiado por los vecinos.

ENFOQUES DIVERSOS

Independientemente de quién mande en Washington, para Estados Unidos la producción de drogas ilícitas representa un serio problema de seguridad

2. *El Espectador*, Bogotá, sábado 18 de noviembre del 2000.

nacional y, como respuesta, su estrategia se ha limitado a reducir la oferta a través de la erradicación de las materias primas debido a la reflexión de Lee Brown: "Mejor atacar el panal que a las abejas volando".

Por su parte, los bolivianos no aspiran a recibir ayuda externa reembolsable sino que, en cumplimiento de una obligación moral de los consumidores, debe haber un pago de indemnización a través del desarrollo alternativo. Esto puede compensar el enorme daño propinado contra su economía por la eliminación sin sustitución previa de los cultivos de coca. Así se podría recuperar la confianza de los labriegos en el Estado boliviano.

Aunque los peruanos no se oponen al combate contra las plantaciones, advierten que una represión que los deje sin alternativas derivaría en la agudización de la pobreza crítica y en una guerra civil insospechada y, por tanto, proclaman la presencia efectiva del Estado para terminar con el sometimiento de aquéllos al narcotráfico y sus aliados.

AUDAZ POLÍTICA RURAL

Sin embargo, las dos doctrinas no han sido más que mera retórica, a juzgar por la miseria en que han quedado atrapados los ex cocaleros de esas naciones. Ello está provocando el resurgimiento de las siembras tras un explosivo malestar popular, por lo pronto acallado con acciones policiales. En nuestra opinión, la salvación nacional radica en despojar a los bandos violentos de la sumisión campesina mediante una audaz política de desarrollo rural.

Lo que está en juego en Colombia no es la simple erradicación de los cultivos con fines ilícitos exigida por los estadounidenses, sino la lealtad al Estado de los cientos de miles de familias que, para poder sobrevivir, vienen dependiendo de esa actividad. Esa lealtad está refundida por su profunda desconfianza en el Estado e hipotecada a unos subversivos que antes se ufanaban de izquierdistas. Éstos les han arrebatado la confianza a la fuerza o se la han comprado mediante su supuesta protección, que se disputan a sangre y fuego con los paramilitares, sus feroces competidores en el tráfico clandestino de narcóticos y de armas. Ni el gobierno ni la clase dirigente se han percatado cabalmente de que la salvación nacional no radica en otra cosa que en despojar a ambos bandos de la sumisión campesina mediante una audaz política de desarrollo rural de largo y sustancial alcance, ante la cual necesariamente aquélla tendría que aplazar sus respectivos anhelos particulares.

EL NECESARIO PLAN EUROPA

La presidencia de la Unión Europea ha declarado que "no hay solución militar que permita lograr una paz duradera. Este país conoce una violencia endémica cuyas causas van más allá del conflicto engendrado por las guerrillas y el tráfico de drogas. La Unión Europea alienta sin reservas al

gobierno colombiano a que adopte reformas estructurales que permitan reducir las desigualdades, fomenten el progreso social y aumenten el nivel de vida, sobre todo en el campo. Al reclamar una “política agraria ambiciosa”, agrega que “habría que prestar especial atención a los campesinos que han conservado cultivos tradicionales, con el fin de darles los medios para poder resistir a la presión o a la tentación de optar por la ilegalidad... Las experiencias llevadas a cabo en otros países andinos para reducir los cultivos ilícitos han dejado patente que si el problema se aborda en un único país, sólo se consigue desplazar a otro país vecino. La lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada sólo sería eficaz si se planea en los ámbitos regional e internacional”. En ese caso, ¡¡bienvenido sea el “Plan Europa”!!

SÍSIFO EN LOS ANDES

Con los aportes de los grandes países consumidores se puede adelantar una estrategia de desarrollo rural alternativo en la región andina. Es innegable el buen dividendo que para Colombia ha significado la exposición internacional del conflicto político y social que padecemos. Gracias a ello, el mundo está mejor enterado sobre lo que nos aqueja y entiende más que antes su estrecha conexión con las etapas de producción primaria, elaboración y tráfico de estupefacientes y, por ende, la ostensible corresponsabilidad de las sociedades donde se concentra su comercio detallista. Pero falta edificar y aplicar una auténtica visión regional del problema con el fin de ir más allá de los esfuerzos aislados de gobiernos del área andina, casi siempre con actitudes más reactivas que espontáneas.

Nuestros países han venido desplegando una nueva versión del mito de Sísifo: la práctica de cargar, cada uno por su lado, el insoportable peso del problema que suele expresarse en términos de violencia y miseria contra las gentes pobres del campo. Si se reprime en el Monzón y el Alto Huallaga en Perú, o en Los Yungas y el Chapare en Bolivia, crece en Colombia. Y si se persigue dentro de Colombia primero en Guaviare y luego en Caquetá, revienta en Putumayo, el Catatumbo y la serranía del Perijá. Y si se trata de eliminar allí la siembra, entonces los habitantes de las provincias vecinas de Ecuador y Venezuela entran en pánico. Y así, sucesivamente, avanza la ola de esta condena sin fin.

NARCOCADENA PRODUCTIVA

Por su parte, los narcotraficantes actúan mediante una muy bien orquestada campaña corporativa y zonal, como mandan las leyes contemporáneas del mercado y los principios de la administración de los negocios, orientados fundamentalmente hacia la demanda y ligados a través de una impecable atención en materia de servicios a todos los eslabones de las cadenas productivas de las drogas, empezando por los cultivadores, a quienes

proporcionan asistencia técnica, semillas, agroquímicos y toda la financiación. Asimismo, se encargan de la protección personal de los labriegos, controlan el procesamiento y la distribución y velan por la recolección oportuna de las cosechas y su correspondiente y cumplido pago, dentro del contexto de una genuina modalidad de agricultura por contrato con todas las garantías necesarias.

Dentro del marco actual de la globalización, competir por la vía de la disuasión con semejante red de eslabones del circuito de estas actividades ilícitas exige romper con los esquemas convencionales de las políticas nacionales y apartarse de la ortodoxia tradicional del manejo segmentado y desarticulado del flagelo. Sólo con el aporte mayoritario de recursos proveniente de los grandes países consumidores se podrá adelantar una estrategia integral de desarrollo rural alternativo para toda la región andina.

Impactos sobre Bolivia

Antonio Aranibar

EL PRETEXTO DEL PLAN COLOMBIA

En Bolivia no vamos a echar la culpa al Plan Colombia de nuestros problemas. Nuestro verdadero problema es el Plan Banzer, que desde 1997 quiere llegar a la "coca cero" mediante la militarización, el olvido del desarrollo alternativo y la violación sistemática a los derechos humanos, con el perverso resultado de instalar la violencia fratricida por primera vez en nuestra historia.

Sería un error que la simplificación estadounidense de la lucha contra el narcotráfico a través del Plan Colombia se convierta en el generador de todos nuestros males que, en nuestro concepto, está en la "ley del hombre", en la visión de EE.UU. de la lucha contra el narcotráfico que se impone a América Latina, e incluso a los europeos, que no tienen capacidad para enfrentarla. Esta es la realidad de las cosas.

La Unión Europea no está de acuerdo con el Plan Colombia y financieramente no de modo suficiente. Pero en realidad, Europa no tiene una posición política clara y propia con relación al conjunto de los países latinoamericanos, porque constatamos que es un "gigante económico pero un enano político", sin posibilidad de contrarrestar la visión prohibicionista estadounidense que impide una genuina lucha contra el narcotráfico.

TEMA DE FONDO

Tal como señalamos en una carta a la ONU que firmamos en 1998, el narcotráfico hace un daño enorme a la humanidad y a nuestros países, pero el daño que genera la lucha contra el narcotráfico concebida en términos estadounidenses es igualmente funesto. El tema de fondo es que estamos

en un círculo vicioso y sin salida, porque no podemos quedarnos pasivos frente al narcotráfico pero si reaccionamos como está haciéndose en esta lucha de Estados Unidos, tenemos iguales o peores efectos para nuestros países. El problema de fondo –y hay que decirlo con toda claridad– es que no se vislumbran propuestas alternativas suficientemente diseñadas.

Todo aquel que plantee el tema de la lucha contra el narcotráfico en términos de una guerra en la que debe eliminarse a un objetivo y que es el narcotráfico, está planteando una guerra perdida de antemano y nos está llevando por el despeñadero. Es eso exactamente lo que propone Estados Unidos.

BÁNZER Y LA MOVILIZACIÓN COCALERA

Entre el momento de la elección popular en abril y el de su elección congresal en agosto de 1997, Banzer hizo el compromiso unilateral de eliminar la coca y formuló la tesis de sacar a Bolivia del circuito del narcotráfico. Luego lo tradujo en la tesis de “coca cero”, o sea eliminar la coca excedentaria. A partir de ese momento tuvo la oposición del movimiento cocalero y sus expresiones políticas y quedó claro: Bolivia ingresaba a una situación muy delicada, con la militarización de la lucha contra el narcotráfico y la implantación de la violencia en el Chapare, lo que nunca habíamos conocido los bolivianos.

Tenemos una historia política muy rica: movilización del pueblo, compactación de organizaciones populares, fortaleza de la sociedad civil, valor de sus hombres y mujeres en la lucha por sus derechos y libertades, etcétera. Tenemos una historia de hechos revolucionarios, como el del 9 de abril de 1952 –que marcó un hito–, pero no es una historia de guerra civil, de confrontación armada, de violencia fratricida permanente, como el drama colombiano. Nuestra historia es distinta.

COLOMBIANIZACIÓN EN EL CHAPARE

No obstante, el resultado de tres años de aplicación del Plan Banzer en el Chapare es que tenemos un proceso de “colombianización” de Bolivia. Antes de que existiera el Plan Colombia en Bolivia ya teníamos este riesgo: el de la violencia fratricida como componente normal de la resolución de los problemas políticos. Lo que tenemos es una situación incontrolable de violencia y violación sistemática de los derechos humanos, mientras el gobierno se jacta de haber culminado exitosamente su plan de lucha contra el narcotráfico y ha anunciado formalmente que se ha erradicado la última hectárea de hoja de coca excedentaria en el Chapare.

Sin embargo, los líderes cocaleros afirman que nunca habrá una última hectárea de coca en Bolivia. Dada la situación geográfica y social del Chapare y la naturaleza económica del fenómeno del narcotráfico, es sencillamente imposible tener “coca cero”. Sostienen que de una u otra

manera subsistirá este fenómeno, pero por razones políticas el gobierno dice que hay un éxito rotundo. Es así que el mismo Banzer, que prometió coca cero en cinco años, súbitamente lo consiguió un año y medio antes.

Ante las convulsiones sociales de abril y de setiembre, el débil gobierno de Banzer cedió en todas las demandas: concedió todo al Movimiento Indígena Aymara, que es una eclosión poderosísima y muy riesgosa para la unidad y la integridad de Bolivia como nación. Luego vinieron los maestros y les concedió todo. Lo mismo sucedió con la policía, que se lanzó a una huelga: por primera vez en la historia de Bolivia, un conflicto comienza con un pedido de 20% de aumento y termina con una solución del 50%. Se trata de un gobierno impotente frente al conjunto de los sectores sociales, pero impositivo frente al movimiento cocalero.

MILITARIZACIÓN INDUCIDA

Lo que hoy día está pasando en Bolivia no es el resultado e impacto del Plan Colombia sino que está relacionado con la naturaleza perversa del problema tal como está siendo respondido en nuestros países: la militarización inducida por los Estados Unidos. Está claro que el tema es regional, transnacional, mundial, pero las políticas desarrolladas hasta ahora son nacionales, unilaterales, a lo sumo bilaterales, pero sólo con los Estados Unidos. Frente a esta compleja realidad, lo que se pone en riesgo no es sólo la gobernabilidad de nuestros países sino la propia democracia.

Aparecen los eufemismos y las medias verdades, que probablemente son nuestros peores enemigos. Nos encontramos ante la clásica doble moral de los Estados Unidos aplicada en su lucha contra el comunismo: si la lucha contra el narcotráfico se hace en sus términos, pasarán por encima de la democracia, como es el caso de la experiencia del Perú. Durante la guerra fría, la amenaza contra la democracia no venía de los militares sino de los demócratas agazapados en los principios y métodos de la democracia. Ahora, como antes, se trata de una "democracia de baja intensidad" como la que tenemos en Bolivia, con riesgo de soluciones tipo Fujimori o Chávez.

ALTERNATIVAS COMUNES ANDINAS

La cuestión es cómo podemos oponer una visión alternativa a la actual política antinarcóticos. Se trata de impulsar tareas éticas en la lucha contra el narcotráfico y, por ese camino, avanzar hacia la única salida, que es la legalización en todo el mundo. Pero es obvio que no podemos plantear aisladamente esta salida hasta que cambien ciertos determinantes políticos y geopolíticos, como es el tratamiento del tema como uno de seguridad nacional para los Estados Unidos.

Este es el punto de partida y sobre el mismo no deben tenerse ilusiones ni fundamentalismos, sino realismo. Para ello se necesita una convicción

de país, con un espacio en el futuro globalizado y marginalizante del siglo XXI. El destino de Bolivia está íntimamente vinculado con el de la región andina. Para defender la democracia necesitamos más democracia y no más autoritarismo. Para defender la viabilidad de nuestros países necesitamos más patriotismo en el mejor de los sentidos, un patriotismo integrador de las visiones andinas y latinoamericanistas. Busquemos respuestas comunes, como reducir o neutralizar los daños que nos hace este tipo de lucha contra el narcotráfico y aprovechar las ventajas de esta situación.

Desde esta perspectiva tiene sentido discutir el tema del desarrollo alternativo, una asignatura pendiente y fracasada que forma parte de la necesidad de administrar la lucha contra el narcotráfico para darle mayor grado de legitimidad y viabilidad. Pero existen imposibilidades, como la necesidad de cambiar no sólo los supuestos de la economía de la coca sino el mismo modelo económico neoliberal y su ortodoxia. Hay caminos alternativos que deben ser explorados y agresivamente puestos en vigencia: políticas públicas en las que el Estado recobre su función reguladora, mercado competitivo y no excluyente, una sociedad civil activa, democracia participativa y, en este camino, encontrar el desarrollo alternativo.

Impactos sobre el Perú

DESPENALIZAR AL PRODUCTOR

Alberto Arciniegas

Guardando distancias de tiempo y dimensión, desde una visión militar el problema peruano es similar al colombiano, por lo que vale la pena reflexionar sobre nuestra experiencia al encarar la problemática del narcotráfico y la subversión en un territorio concreto.

En el año 1989 me tocó ser jefe político militar del 22% del territorio nacional: Alto Huallaga (Huánuco y San Martín), Ucayali y Aguaytía (Ucayali), Requena (Loreto) y una parte del departamento de Amazonas. En estas zonas la coca era el cultivo prevaeciente. Aunque el arroz y el maíz también eran importantes, se pudrían en los almacenes de ECASA y ENCI, organizaciones estatales que compraban estos productos. La situación era: campesinos y coca por todos lados, dos cooperativas quebradas (Naranjillo y Tocache) y un programa de las Naciones Unidas que era el único que se ocupó de darnos asesoría técnico-productiva y apoyo internacional para neutralizar la presencia estadounidense que nos presionaba hacia una política represiva.

Sendero Luminoso había realizado un paro exitoso en 1988, cerrado y destruido partes de la carretera Marginal y tomado Uchiza con el apoyo del pueblo, matando a todos los policías en la Plaza de Armas. Nos habían encargado pacificar una zona que llevaba nueve años de guerra y en donde el pueblo era amigo de Sendero Luminoso y enemigo del Estado.

En esta situación decidimos tener como proyecto político la Constitución del año 1979 y convencer a los campesinos de que éramos mejores que Sendero Luminoso. Sin embargo, como dijo hace muchos años Pedro el Grande, “política sin fuerza es como música sin instrumentos”. Por ello, paralelamente dimos múltiples combates contra columnas armadas de Sendero Luminoso. Para una lucha de este tipo es indispensable que la Fuerza Armada tenga claro que es parte del pueblo, que le ha entregado las armas para su defensa y no para su destrucción. Sólo con un concepto ideológico y constitucional de este tipo se puede detener a la subversión.

Dentro de los conceptos que teníamos los militares hasta 1989, el primer objetivo de la guerra contrasubversiva era destruir al enemigo y el segundo ganarse la adhesión del pueblo. Contra la opinión de los estadounidenses, tuvimos la irreverencia de voltear los objetivos: primero ganar la adhesión del pueblo y, con su apoyo, destruir a los subversivos.

Para ello nos basamos en el preámbulo de la Constitución de 1979, en el que se afirma que la célula básica en la sociedad es la familia. Sin embargo los campesinos decían: “Está bien, General, lo que usted dice, pero aquí lo único que nos compran es coca. Si usted me dice que me compran plátanos los sembraré”. Fue suficiente para comenzar a conversar. Nos contactamos con los dirigentes de una cooperativa, pese a la indignación de los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, debido a que en 1989 sus estrategias habían cambiado hacia una concepción militar con la participación del Pentágono en la lucha antidrogas.

Allí aprendimos que el desarrollo alternativo es el conjunto de acciones orientadas a brindar la posibilidad a los campesinos cocaleros de cambiar en forma integral sus cultivos por otros que no estén considerados como materias primas para la producción ilícita de drogas. La erradicación forzosa de cultivos llevada a cabo por el gobierno anterior entre 1998 y 1999, con saldo de heridos y apaleados, nos trajo a la memoria una situación vivida en Uchiza diez años antes, que se hizo con el apoyo del pueblo, compuesto en su mayoría por campesinos cocaleros.

Luego de esos sucesos, el gobierno de entonces dispuso que se creara una nueva zona de seguridad a cargo del Ejército, y después de 63 combates a lo largo de nueve meses conseguimos desarticular a las fuerzas senderistas porque contamos con el invalorable apoyo de los campesinos cocaleros. Los campesinos actuaron de esta manera debido a la oportunidad que se les brindó de cambiar su situación legal al pasar a ser considerados como interlocutores válidos y no como criminales. El mencionado estatus permitió al Estado peruano, con el acuerdo internacional, conseguir que los campesinos participaran directamente en el desarrollo alternativo. No obstante, creemos que es importante considerar la participación de las Fuerzas Armadas como factor preponderante para seguir manteniendo la paz interna.

Perú, Plan Colombia y cambio de gobierno

Alberto Adrianzén

Estamos entrando en una etapa muy compleja, con democracias mínimas, sin condiciones materiales para su consolidación y reproducción y con problemas derivados de una globalización no administrada por las naciones, lo que se refleja en la visible hegemonía del FMI en las políticas económicas y en la aplicación de un modelo neoliberal que ha hecho crecer la pobreza en América Latina. Hoy día en el Perú no sólo hay más pobres en términos absolutos, sino también más pobreza en términos de consumo o gasto –según la información de CUÁNTO–, con las consecuencias políticas que ello implica.

En esta situación, al asumir el gobierno luego de la caída y huida de Fujimori, encontramos no solamente una administración controlada y corrupta, sino que las labores sociales estaban absolutamente deterioradas en términos morales. La lógica de la trafa era terrible, el clientelismo político generalizado e inmenso el grado de corrupción hallado.

Otro problema ha sido la clase política, que no se ha reciclado y ha perdido contacto con la sociedad. Este fenómeno no ocurre sólo en el Perú sino que se nota con preocupación en varios países de América Latina. Venezuela es un gran signo de interrogación, con un régimen plebiscitario, casi el modelo perfecto en política de una persona que somete todo a plebiscito –como el último sobre las centrales sindicales– y que puede traer consecuencias muy negativas, y con una sociedad que tampoco sabe mucho el rumbo que quiere. Aquí también tenemos la responsabilidad de la clase política venezolana, que ha sido literalmente sepultada.

Ecuador es una sociedad bloqueada políticamente, en la que todos tienen un nombre –los que vienen de la sierra, de la costa, de abajo, de arriba– y no existe un concepto que los unifique como nación. Por ejemplo, al discutir en Guayaquil con unos intelectuales un manifiesto referido a “los países andinos”, éstos sostenían que Guayaquil no era andino. Bolivia es un país que sufre convulsiones cada cierto tiempo y llegará un momento en que habrá una verdadera convulsión. En este contexto, Colombia también enfrenta problemas muy graves.

El Plan Colombia diseñado por el gobierno colombiano tiene objetivos positivos de fortalecimiento del Estado, respeto de los derechos humanos, combate al narcotráfico y diferenciación entre narcotráfico y guerrilla. Se trata de la última oportunidad que tienen los colombianos para buscar la pacificación y encontrar soluciones a problemas endémicos en ese país. El Plan Colombia de los Estados Unidos tiene consecuencias en el desplazamiento de poblaciones, cuestiones ecológicas y violencia interna que pueden trascender las fronteras. Tal es el caso de la enorme presión que está teniendo sobre el Ecuador en materia de desplazamiento, en un país con debilidad del poder y que ha renunciado a ejercer una política económica soberana al dolarizar su economía.

Somos un gobierno que recién comienza, transitorio y con plazo fijo, producto de la crisis terminal del gobierno anterior y de la alianza de partidos en el Congreso de la República. La influencia política del gobierno en el Congreso a través de Acción Popular (AP) y Unión Por el Perú (UPP) es mínima, ya que son partidos chicos, lo que es una virtud y a la vez un defecto. La virtud es que la presión que ejercen estos partidos sobre el gobierno es mínima, y su defecto es que no tienen canales de comunicación que les permitan ser un termómetro de lo que viene pasando en el país. Se entró rápidamente en la etapa de conformar el equipo de gobierno y nos encontramos con que había pocos cuadros que no hubieran estado comprometidos con el fujimorismo y fueran personas honradas y democráticas.

En estas condiciones, recién se está discutiendo en la Cancillería una política frente a Colombia y el Plan Colombia, lo que implica modificar lo anterior. Por ello no tenemos muchas propuestas concretas y específicas que podamos transmitir sobre este tema. Sabemos perfectamente lo que es la droga en el país y tratamos de encaminar el asunto de la mejor forma posible con la ayuda de expertos que conocen el tema, para evitar que se continúe con la política de erradicación y se reactive la Mesa de Diálogo instalada en el Alto Huallaga. Tratamos de atender a los dirigentes que nos visitan y, en la medida de lo posible, comenzar a armar una política antidrogas con un gobierno que sólo va a estar ocho meses en el poder, pero como las elecciones son en abril, tendrá que coordinar las políticas con el gobierno entrante.

A eso se suman las dificultades de un gobierno fragmentado pero también hipercentralizado. Como consecuencia de las mafias que estaban en su interior, era fragmentado en la distribución de las cuotas de poder, pero el Presidente firmaba todo en términos de nombramientos. Ahora estamos armando el gobierno, nombrando personal y tratando de generar políticas públicas, sabiendo que tenemos ocho meses y que, por tanto, no serán definitivas sino iniciales. Estamos iniciando una lucha radical contra la corrupción, promoviendo elecciones limpias y encarando el problema del narcotráfico. En este caso, tenemos que vencer algunas resistencias, como las de la embajada de Estados Unidos, que tiene una influencia notable no solamente en los asuntos del narcotráfico sino en todos los asuntos de la vida diaria del país.

Es así como el pase al retiro de 170 oficiales de la Policía Nacional hace unos días ha generado reparos en la Embajada de Estados Unidos, y parece extraño que en este contexto aparezca un artículo en el Washington Post diciendo que la CIA participó en la captura a Guzmán, como intentando quitar credibilidad al general Ketín Vidal, ministro del Interior, que está abocado a la captura de Vladimiro Montesinos.

Entonces, estamos armando un gobierno y contratando gente que tiene un techo de ocho meses, aunque hay presiones para que nos quedemos más tiempo. La sociedad civil debe moverse y reactivarse para poner temas de agenda para el próximo gobierno, como una mesa de diálogo tripartita con

los trabajadores o una política consensuada sobre drogas. En el tema del narcotráfico, la lógica del gobierno de Fujimori fue entregar el asunto a CONTRADROGAS y al Ministerio de Salud, ya que veía el problema como uno de consumo y no de producción básicamente, lo que tiene que ver con la erradicación como solución final.

Por así decirlo, el Perú está a la vanguardia de la región andina debido a que Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela, dada la crisis de gobernabilidad en la que se encuentran, pueden pasar por fases parecidas a la del fujimorismo, políticamente hablando. Pero incluso nosotros aún no estamos inmunizados ante esa posibilidad, por el nivel de destrucción política de la sociedad y por el grado de desmoralización que existe. La lógica de los sectores más pobres y mayoritarios de nuestro país es esencialmente antidemocrática, ya que no le importan las futuras elecciones. Tienen la lógica de “cuánto hay y qué me dan”. Existe el temor en la población sobre qué va a pasar con el PRONAA y con la política asistencial. No estamos frente a una población organizada en función del futuro y con una lógica democrática. Por ello no estamos inmunizados frente al resurgimiento de caudillos como Fujimori o Chávez. Lo que tenemos en el país actual son dos estructuras: una militar que estamos golpeando sistemáticamente para erradicar el poder político de las Fuerzas Armadas, y una civil, que es la estructura fujimorista, que está metida en el PRONAA, en el PROMUDEH y en todos lados.

Nuevo mapa del narcotráfico en los Andes

Ricardo Soberón

La política peruana se mueve más rápidamente que internet, pero en los últimos ocho o nueve meses la política regional se está moviendo a la misma velocidad alrededor de lo que ocurre en Colombia. Desde una perspectiva de seguridad regional, son evidentes las enormes contradicciones del Plan Colombia como política pública de seguridad con respecto a la política de lucha contra las drogas. Sostenemos que cualquier plan público que pretenda acabar con el problema de las drogas y erradicarlo se convierte en un fracaso inmediato. Si un país, cualquiera que éste sea, decide “administrar el problema” y ubicarlo en su verdadera dimensión, tendrá mayores posibilidades de solucionarlo.

¿Cuál es y cuál debería ser la situación del Perú con relación al Plan Colombia y sus impactos regionales? Habría que diferenciar, en primer lugar, los impactos reales en su aplicación de los impactos deseados por algunos de los actores que participan en el Plan. Está claro que al interior de los Estados Unidos es muy distinta la posición de la DEA o el Departamento de Defensa con relación al Plan. Asimismo, en el plano regional la posición del presidente Pastrana o la del presidente Chávez también resultan contradictorias al encarar el Plan Colombia.

Con relación al Perú, es obvio que el gobierno anterior fue un promotor fundamental del peligro que representaba Colombia para la situación de la seguridad regional. Incluso podríamos decir que parte de la negociación entre la CIA y el fujimontesinismo fue aceptar el papel del Perú como promotor de una situación de inseguridad regional en los Andes luego de los acuerdos entre Perú y Ecuador. En su estrategia continental, el Perú debía dirigir los esfuerzos para prevenir la internacionalización del conflicto colombiano.

Creemos que estos ocho meses de gobierno de transición nos pueden dar un nuevo espacio, pero vemos algo de lentitud en las decisiones. Los miedos son enormes y las presiones de la Embajada de Estados Unidos en Lima son notables para que el gobierno de Paniagua mantenga una posición sobre drogas acorde con lo que piensa el Departamento de Estado y, de ser posible, una posición con respecto a la situación de Colombia que concuerde con lo que Fujimori y Montesinos sostenían hace algunos meses: la idea del peligro de la internacionalización del conflicto.

Consideramos que una premisa de trabajo en este asunto es “dessegurizar”, quitar al tema de las drogas el terreno de la seguridad nacional. En este sentido no coincidimos con el general Alberto Arciniegas cuando sostiene que si la Policía Nacional se ve sobrepasada le toca a las Fuerzas Armadas combatir al narcotráfico. Creemos que la Fuerza Armada nunca debe encargarse del problema de las drogas.

Visto el tema a futuro, creemos que la posición de política exterior del Perú pudiera ser más interesante si se acerca a una perspectiva brasileña de no injerencia y de respeto por los asuntos internos, de no militarización del problema de las drogas y de no incorporación del problema de Colombia desde una perspectiva regional. Esto no quita que en los últimos meses haya habido niveles de internacionalización del conflicto y sus impactos hayan sido desplazados a otros países por la propia dinámica del narcotráfico.

Quiéranlo o no Washington, Bogotá o Lima, el fenómeno del narcotráfico seguirá regionalizándose. Mientras tanto, el Perú ha tomado una primera medida: la adopción de un anillo de seguridad. En un mapa del cono noroeste de América del Sur observaremos que el nuevo esquema de seguridad regional está dado por el tema antinarcóticos: desde Soto Cano en Honduras hasta la Base de Misiones en Paraguay. Es decir, todo un redimensionamiento del sistema de seguridad estadounidense sobre la base de Manta, la creación de acuerdos para patrullaje conjunto aéreo y marítimo, el rompimiento de los puentes aéreos, etcétera.

La otra perspectiva es la de las Fuerzas Armadas brasileñas alrededor de los países amazónicos como parte del Tratado de Cooperación Amazónico de 1978. Tarde o temprano la política brasileña va a chocar con las estrategias de EE.UU., particularmente en lo que se refiere a la ocupación económica y militar de la cuenca amazónica. En ese sentido, desde una perspectiva estadounidense sería peligrosa la relación que está establecién-

dose entre Chávez y Cardoso para construir un eje Brasilia-Caracas, por lo que ya comienza a enrostrarle muchos de los aspectos que planteaba la administración Clinton para esta parte del continente.

Con el nuevo gobierno del presidente Bush aparentemente hay un apoyo bipartidista al Plan Colombia. De ahí que el temor o la duda va a estar centrado básicamente en si los que ocupen los comités congresales y la Secretaría de Estado serán “halcones aislacionistas” o “halcones imperialistas”, y según esta dicotomía se va a determinar la actitud de Washington con relación al Plan Colombia y sus impactos regionales. Con respecto a Perú, el papel de Fujimori-Montesinos no va a volver a ser desempeñado, lo que es un factor de preocupación para Washington, que tenía al Perú como punta de lanza importante para monitorear permanentemente la situación de Colombia.

Desde la perspectiva de la sociedad civil peruana, si bien hemos reaccionado tarde con respecto al Plan Colombia y sus impactos, podemos ir explorando algunas líneas sobre qué hacer. Primero, habría que señalar que, como política antinarcóticos, el Plan Colombia es un fracaso absoluto para solucionar el problema de la oferta y los cultivos. Habría que denunciar al Plan Colombia por la introducción de mecanismos de control biológico para resolver el problema de los cultivos. En ese sentido, el grupo de monitoreo ecuatoriano del Plan Colombia lo critica por su potencial violación a la Convención de Prohibición de Armas Biológicas, de la cual son parte Colombia y Estados Unidos.

Hace un mes y medio estuvimos en el Carchi, Ecuador, en una reunión con prefectos fronterizos. Tuvimos oportunidad de conversar con el general Yandún, prefecto del Carchi, y le preguntamos su opinión sobre el proyecto de desarrollo norte del gobierno ecuatoriano. Nos dijo que tenía el profundo temor de que uno de los objetivos del Plan Colombia en su perspectiva regional fuera vaciar demográficamente las áreas de frontera con Colombia y luego debilitar cualquier síntoma de tejido social que hubiera, para que las operaciones militares o de inteligencia pudieran realizarse sin mayores dificultades. En el Perú deberíamos tener la misma preocupación. Lamentablemente la zona del Putumayo está muy alejada, lo que explica el poco interés que hay en nuestros círculos en Lima para abordar este tema.

Drogas: Una guerra que no se puede ganar

Enrique Obando

Lamentablemente, la guerra contra las drogas no se puede ganar mientras la demanda siga existiendo. En Estados Unidos ha habido una política de reducción de la demanda, pero no pueden bajar más el consumo porque ya se ha llegado a un nivel en el que deberían cambiar su sistema económico y social, y eso es precisamente lo que no están dispuestos a hacer. Como la

realidad construida en Estados Unidos parte del principio de que el sistema económico y social no puede ser tocado, entonces la idea de acabar con la droga eliminando la producción tiene mucha vigencia en círculos estadounidenses, pero en nuestra opinión no tiene futuro.

Como países en vías de desarrollo, esta perspectiva es la que nos imponen y es la política con la cual tenemos que trabajar. El problema es que, para Estados Unidos, el tema de la droga es un asunto de seguridad nacional y para nosotros también. Nosotros no podemos decir: "Es un problema de los gringos, que se envenenen solos", porque el tema de la droga ocasiona mafias tan poderosas que llegan al Estado mismo. En el caso de Colombia la mafia le declaró la guerra al Estado, y en un momento casi se la gana, con coches bomba en las ciudades y asesinatos de ministros y jefes de policía. No estamos hablando de la lucha de un grupo subversivo con una ideología determinada sino de una mafia contra el gobierno.

En el Perú, la mafia ha estado en el gobierno en los últimos seis años y de pronto vamos a tener que reescribir la historia con las recientes declaraciones del hermano de Pablo Escobar, quien afirma que éste financió la campaña de Fujimori de 1990. Ello significaría que hemos tenido la mafia de la droga en el poder a través de Valdímiro Montesinos en los últimos diez años. Cuando tenemos Fuerzas Armadas, Poder Judicial y políticos comprados por la droga, estamos hablando claramente de un problema de seguridad nacional. Estamos hablando de gente cuya primera prioridad es trabajar para los amos que les pagan y cuya segunda prioridad será preocuparse por las cosas del país. Definitivamente es un asunto de seguridad nacional para nosotros tanto como puede serlo para los estadounidenses.

El problema es que mientras en Estados Unidos el consumo es un tabú, ya que tiene que ver con un sistema económico que no será cambiado, sencillamente vamos a seguir dando vueltas en círculo sin llegar a ninguna conclusión. Pero, ¿cuáles van a ser las únicas dos salidas a este problema?

Una es hipotética, porque difícilmente se dará en los próximos años: la legalización de las drogas. Esta es una guerra entre economistas y médicos: los economistas, preocupados por subir las curvas de oferta y demanda, dicen que si se legalizan las drogas se acaba la mafia y el precio se va al suelo, con lo que se soluciona el problema. Los médicos dicen que mucha gente morirá por este camino y tienen experiencias directas en personas, aunque no en estadísticas. Sin embargo, hay algunas drogas adictivas al primer uso que son legales, como el cigarrillo y el alcohol, que son fáciles de adquirir por nuestros hijos. El escenario de la legalización sería un tanto complicado, y es difícil que sea aceptado por políticos o por capas importantes de la población.

La otra salida al tema podría ser la "ley de las materias primas", o sea, una droga alternativa y sintética que reemplace a la coca y a la cocaína. Puede pasar con la hoja de coca, la pasta básica y el clorhidrato, lo mismo que pasó con la marihuana. Los colombianos producían una marihuana

extraordinaria, y los estadounidenses les quitaron el mercado produciéndola en su propio país. Los colombianos salieron del mercado, y probablemente en el futuro el proceso de producción, comercialización y consumo de otras drogas también será hecho en los Estados Unidos, con lo cual nuestro problema se acabó –por lo menos en la parte de la mafia– y se quedará en los Estados Unidos. Mientras eso sucede, continuaremos peleando con nosotros mismos, con una guerra impuesta que no podemos ganar.

La guerra que sí se puede ganar, por lo menos en el caso colombiano, es la que no está recibiendo apoyo de los Estados Unidos: la guerra contra la subversión. En Colombia se habla de que hay tres guerras: una contra la guerrilla, otra contra el narcotráfico y una tercera contra los paramilitares. Pero en realidad hay una sola guerra, que es contra el Estado colombiano, el esfuerzo por manejar su propio país, por ocupar su territorio y gobernar. La zona donde sí podrían hacerlo es precisamente donde no hay apoyo de los Estados Unidos, en donde se está dando, como lo impulsado por el general Arciniegas, una guerra política para ganar a la población, porque quien gana a la población gana la guerra.

En este caso, al dar prioridad a la lucha antinarcóticos lo que se está haciendo es arrojar a esa población en manos de la subversión, porque entonces lo que va a hacer el Estado es alinearse con miles de cocaleros y con buena parte de la población de ciertas áreas en donde precisamente está sembrada la guerrilla. Lo que va a hacer finalmente es fracasar en los dos frentes: narcotráfico y subversión.

El control de las drogas por la vía militar en teoría puede hacerse, pero no por mucho tiempo. En el Perú lo hicimos, pero con la Fuerza Aérea, con un grupo pequeño de pilotos que están menos expuestos a la corrupción que, por ejemplo, seiscientos hombres diseminados en el campo. Con interdicción aérea y destrucción de aeropuertos se logró bajar artificialmente el precio de la hoja de coca en el Perú, lo que se puso como ejemplo frente a Bolivia y Colombia. En efecto, se puede controlar militarmente, pero el problema persiste en la medida que el consumo no cesa, con lo que tendríamos que tener un estado policial por los próximos cincuenta años. En cuanto se deja el esfuerzo, resurge la droga. No tiene sentido hacerlo indefinidamente, porque se convierte en la guerra de los cien años, la de nunca acabar.

En el caso peruano hay experiencias que nos llaman a la reflexión sobre el papel de los Estados Unidos en el gobierno de Fujimori con relación a la lucha antinarcóticos. Pareciera que se impuso la política del antiguo oeste, en la que para mantener el orden se buscaba a un bandido, se le daba la chapa de *sheriff* y, como reconocía a los otros bandidos, se encargaba de colgarlos y acababa con el problema. Aquí teníamos al señor Vladimiro Montesinos, que desde el año 1991 recibía US\$ 50 000 mensuales de Demetrio Chávez Peñaherrera. Montesinos era un antiguo conocido de la CIA y el Estado peruano.

Esta era la época en la cual se luchaba contra la subversión y se llegó a un acuerdo entre la Marina de Guerra del Perú y la CIA para grabar las transmisiones radiales de los subversivos en el valle del Huallaga. Al grabar entran las transmisiones de los subversivos, pero también las de los radios del Ejército y los narcotraficantes. La Marina comenzó a darse cuenta de la relación que había entre el Ejército y los narcotraficantes y empezó a armar lo que parecía ser una reunión en el pueblo de Campanilla, entre el entonces presidente del Comando Conjunto, general Hermoza, con Vaticano. Todas estas grabaciones fueron enviadas a la CIA, que sabía exactamente a qué se dedicaba Vladimiro Montesinos y cuál había sido su papel como abogado de narcotraficantes. Lo que ocurrió era que Estados Unidos agarró del pescuezo a la dupla Fujimori-Montesinos y les dijo: "Si ustedes quieren sobrevivir, acaben con el problema de la droga en el Perú con el ingreso de la Fuerza Armada en la lucha antidrogas".

Desde el general Arciniegas, la política peruana había sido que la Fuerza Armada no entrara en la lucha antidrogas por ser corrosiva y no corresponder a su función. El resultado fue que el Ejército y la Fuerza Aérea entraron en esta lucha, mientras Montesinos, que era miembro de una de las mafias del narcotráfico, comenzó a cortar la cabeza a las otras bandas competidoras. Es así como acabó el tráfico de drogas, pero de los que competían con el que estaba ligado al grupo de Montesinos.

Un indicador es el gran número de militares enjuiciados: prácticamente las tres cuartas partes de los jefes políticos militares del Huallaga en la época de Fujimori y una serie de oficiales que misteriosamente comenzaron a ser enjuiciados por la propia institución. Lo que no se entendía era cómo este individuo ligado desde hacía años al tráfico de drogas estaba realizando esa limpieza, pero ahora sabemos que era totalmente útil a los EE.UU. en ese sentido.

Fue así como se acabó la limpieza a fines del segundo gobierno de Fujimori y somos un ejemplo para el mundo. El zar antidrogas estadounidense viene por lo menos en dos oportunidades, felicita al gobierno peruano y a Montesinos por su excelente labor. Luego viene el problema del Plan Colombia y prácticamente el estallido en Colombia. Con la finalización del problema con el Ecuador, Montesinos y Fujimori decidieron movilizar tropas de la costa peruana hacia la frontera del Putumayo. Movilizaron a 2000 hombres y pusieron cuatro nuevos puestos de vigilancia en una zona en la que solamente había dos: estamos hablando de una región que tiene 800 km de línea recta y 1600 si es que seguimos las ciudades del río.

La idea no era impedir el desborde de población, de paramilitares, de las FARC o de lo que fuera hacia territorio peruano, sino dar un mensaje al gobierno colombiano. En el momento en que Perú mandaba a 2000 hombres a la frontera con Colombia, Ecuador hacía otro tanto y Venezuela y Brasil lo propio, montando el escenario de inseguridad regional. Los estadounidenses quieren decirle hace tiempo a Colombia qué hacer pero no

pueden hacerlo oficialmente, porque cuando lo intentaron, los colombianos salieron con el Plan Colombia.

El Plan Colombia era un plan excelente, al cual no se puede encontrar ningún pero, y los estadounidenses dijeron: "Bueno, nosotros vamos a apoyar el Plan Colombia". Pero evidentemente sólo la parte antinarcóticos en sus aspectos militares. El Plan Colombia original quedó tergiversado, porque la otra parte no tenía ningún apoyo ni sustento económico. Entonces Fujimori dijo: "O ustedes ganan esta guerra o se atienen a las consecuencias", que son tropas en la frontera peruana, ecuatoriana, venezolana y brasileña. Pero éste fue uno de los típicos *bloofs* a los que nos tenían acostumbrados Fujimori y Montesinos, dado que nadie en su sano juicio podía pensar en una intervención militar en Colombia, ni siquiera Estados Unidos.

Aunque una intervención tampoco es del todo incierta, dado que hay locos en todas partes y Estados Unidos tiene planes al respecto. En este sentido, Fujimori y Montesinos han sido muy útiles a la política exterior estadounidense en el tema de Colombia hasta que salió fuera de su control, y la pregunta es por qué. Hay varias hipótesis. Montesinos es un individuo con mucho dinero. Sólo la compra de los MIG 29 le reportó US\$ 270 millones. Es casi incomprensible que se hubiera metido en un problema tan peliagudo como el tráfico de armas a las FARC justamente en el momento en el cual Estados Unidos estaba apoyando la parte militar del Plan Colombia.

Hay una hipótesis manejada por los militares peruanos sobre por qué lo hizo: por razones patrióticas. Según esta hipótesis, la geografía política del norte de América del Sur se está rediseñando. Ecuador está al borde de la explosión e incluso de la desintegración: Guayaquil por un lado, Quito y la sierra norte lindante con Colombia por otro, con una nación que no va. Luego Colombia, en donde la zona fronteriza por el lado ecuatoriano está pidiendo anexarse al Ecuador, debido al caos interno. Según esta hipótesis, Vladimiro Montesinos, en un acto de supremo nacionalismo, decidió participar en el rediseño de las fronteras, incentivar el caos en Colombia dando armas a las FARC para correr la frontera peruana hacia arriba y recuperar el Trapecio de Leticia. Esta hipótesis ha estado en la mente de algunos militares peruanos como una explicación de la aventura de locos que fue este negocio con las FARC.

Independientemente de su objetivo real, sabemos que fue un negocio de la mafia, que lo que realmente obtuvieron fue algunos millones de dólares y que, finalmente, se produjo la caída de Vladimiro Montesinos. ¿Cómo deja este asunto el tema del Plan Colombia para el Perú? Pues vamos a tener que decidir la política peruana frente al Plan Colombia.

El riesgo de que haya un desborde de población al Perú es cercano a cero. Si vamos a la zona de la frontera y vemos cuáles son los frentes guerrilleros que hay hacia el lado colombiano, no vamos a encontrar nada en el lado peruano. Sí hay guerrilla en el Putumayo para el lado ecuatoria-

no: está el Frente 29 de las FARC que son más o menos doscientos hombres. Luego tenemos el Frente 32, que son cien hombres, y luego el Frente 48, con otros cien hombres en el departamento de Caquetá, todos ellos alejados de la frontera con el Perú. Simple y llanamente no existe riesgo para la seguridad nacional peruana con lo que pueda ocurrir en Colombia. Los ecuatorianos y venezolanos definitivamente sí tienen un problema de este tipo y los brasileños no sabemos, aunque ya han desplazado fuerzas para encararlo, pero nosotros definitivamente no tenemos ese problema.

Las preguntas son: ¿Vamos a entrar en el esquema de Washington y presionar a Colombia con tropas en la frontera? ¿Cuál será nuestra actitud ante la eventualidad de que el Plan Colombia no funcione, como es probable? Finalmente este problema debe tener alguna suerte de arreglo regional que no sea estadounidense a la mala ni por presión de los vecinos, sino dar un tratamiento regional sudamericano.

Se debe hacer a los Estados Unidos a un lado por un tiempo para plantear que el problema es nuestro y que vamos a solucionarlo entre nosotros, y buscar algún entendimiento. En la medida que Estados Unidos son los que tienen el oro, los llamaremos si quieren colaborar con nuestra solución, pero no aceptar una vez más que si hacemos un plan como el de Colombia, un plan excelente, éste termine siendo totalmente distorsionado porque el financiamiento viene solamente para la parte que a los Estados Unidos les interesa.

Los participantes del debate

ALBERTO ADRIANZÉN. Sociólogo, analista internacional y asesor de la Presidencia de la República.

ALEJANDRO ANGULO, S.J. Subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), institución comprometida con el Diálogo de Paz y Alternativas al Plan Colombia.

ANTONIO ARANÍBAR. Ex canciller de Bolivia durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, experto en el tema de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

ALBERTO ARCINIEGA. General retirado del Ejército peruano, ex jefe político-militar del Alto Huallaga en 1988-1989 y analista de las relaciones entre civiles y militares.

HUGO CABIESES. Economista, investigador de CEPES, presidente de la Asociación Civil Desarrollo Rural Sustentable (DRIS) y asesor de organizaciones de productores de cuencas cocaleras.

CARLOS GUSTAVO CANO. Economista colombiano, consultor del IICA en desarrollo alternativo y uno de los autores de la primera versión del Plan Colombia.

ENRIQUE OBANDO. Máster en Políticas de Seguridad por la Universidad de Washington D.C. Graduado del Centro de Altos Estudios Militares y de la Escuela Superior de Inteligencia Nacional. Profesor de Ciencia Política y Doctrinas Sociales en la Universidad del Pacífico.

JUAN MANUEL OSPINA. Senador de la República de Colombia, economista con estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, ex director del Instituto Colombiano de Cultura, presidente de la Federación Antioqueña de Ganaderos, de la Sociedad de Agricultores de Colombia y uno de los autores de la primera versión del Plan Colombia.

RICARDO SOBERÓN. Abogado, especialista en análisis de conflictos internacionales, investigador de Acción Andina y asesor de organizaciones de productores de cuencas cocaleras.